



INSEGURIDAD LA GRAN AMENAZA CONTINENTAL

Por Joaquín Villalobos

Hacia los años 60 y 70 los gobiernos civiles en Latinoamérica eran la excepción y los golpes de Estado la regla, desde finales de los 90 los gobiernos militares son la excepción y las elecciones la regla. Con la transición del autoritarismo a la democracia las sociedades ganaron libertades, pero las calles se volvieron inseguras. Latinoamérica es la región del mundo subdesarrollado con mayores progresos democráticos, pero es también la más violenta del planeta con 27.5 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Inseguridad y libertad avanzaron juntas, sin embargo esto no es responsabilidad de las democracias. El autoritarismo construyó estados débiles, seguridad reactiva, poderes judiciales simbólicos y fomentó una cultura de ilegalidad y corrupción. Los ciudadanos aprendieron a obedecer la ley por miedo y en algunos casos a rendir culto a la fuerza. El temor al castigo en vez de la admiración por la ley era la regla y en esa condición la libertad no garantiza la obediencia a la ley.

Con la excepción de Costa Rica, el autoritarismo estuvo presente en todas partes, en México bajo forma civil y en Colombia y Venezuela como prácticas autoritarias de democracias electorales. Costa Rica, Uruguay, Chile y Nicaragua son ahora los países más seguros del continente. Los tres primeros están entre los de mayor cultura ciudadana, a pesar de la interrupción ocasionada por dictaduras militares en Chile y Uruguay. Nicaragua, por su parte, está entre las naciones más pobres y políticamente inestables, pero tiene una población muy organizada, y un ejército y una policía con mucho sentido común sobre lo social y lo político. La cultura democrática, la participación ciudadana y las visiones no represivas son más importantes de lo que se piensa para la seguridad. Colombia, por ejemplo, a pesar de la violencia, ha logrado progresos extraordinarios con el concepto de seguridad democrática y los planes de convivencia ciudadana. Ambas cosas facilitadas por su larga tradición democrática civilista.

Según informes del BID y del Banco Mundial, América Latina es la región más desigual del planeta. El 5% más rico recibe el 25% del ingreso, mientras el 30% más pobre recibe menos del 7.5%. Los más ricos reciben un ingreso 84 veces mayor que los más pobres. Concentración de la riqueza y ausencia de cultura de legalidad en los ciudadanos, equivale a juntar a egoístas desenfrenados con miserables sin ley. Latinoamérica tiene ahora más población y un predominio de sociedades urbanas. Las ciudades provocan contrastes dramáticos entre necesidades vitales y consumismo superfluo, con lo cual la pobreza urbana se vuelve un peligro.

El fin de las dictaduras trajo una liberalización económica necesaria, pero su adopción religiosa hizo pensar que la política no importaba. Empresarios, ejecutivos y economistas asumieron ser el eslabón más alto de la especie humana, poniendo de moda las tecnocracias. Jueces, policías, maestros, médicos, profesionales, académicos, trabajadores sociales y políticos fueron considerados ciudadanos de segunda. Estados que eran débiles fueron debilitados todavía más, por ejemplo hablar de reducir al Estado haitiano era en realidad una invocación al caos, ahora se le llama “estado fallido”. Latinoamérica enfrenta entonces una grave crisis de seguridad bajo un predominio de visiones represivas ineficaces, con una justicia débil, sin herramientas científicas y con servidores públicos corruptos, mal pagados y sin mística.

La inseguridad es el problema que más amenaza la democracia y, en algunos países, es la demanda fundamental de los ciudadanos. Andrés Oppenheimer, en su libro “Cuentos Chinos”, la califica como una “guerra civil no declarada que está cambiando la vida cotidiana de pobres y ricos por igual”. Hay un mapa de los frentes donde esa guerra se está librando. La frontera sur de Estados Unidos ya está militarizada, México tiene batallas con mafias que le disputan parte de sus costas y las fronteras sur y norte. Guatemala, Honduras y El Salvador, en guerra contra las pandillas, son los lugares más violentos con más de 12,000 homicidios anuales; Colombia con un gran narco-conflicto y la tasa de secuestros más alta del mundo; Venezuela con polarización política extrema y una inseguridad que ha dejado 67,000 homicidios en los últimos 7 años; Perú, Ecuador y Bolivia con escenarios simultáneos de ingobernabilidad e inseguridad y Brasil con una guerra urbana que en sólo 48 horas de enfrentamientos dejó recientemente más de un centenar de muertos.

Además de Colombia, donde la debilidad del Estado en el control de áreas rurales es el centro de gravedad del conflicto, México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil empiezan a perder barrios y ciudades frente a delincuentes que las convierten en retaguardias de impunidad, papel que también juegan las prisiones. Esto multiplica la violencia, la capacidad de intimidación y la fuerza social de los delincuentes que se convierten así en un nuevo poder fáctico. Crimen organizado, pandillas, narcotráfico, violencia social, tráfico ilegal de personas, crecimiento del comercio y consumo interno de droga y un enorme mercado de armas cortas, son las principales amenazas. Los jóvenes por su energía, y los militares y policías por su entrenamiento, son los preferidos por las mafias para engrosar sus ejércitos. La corrupción, un mal que durante años fue de segunda categoría, se está transformando en un SIDA social que destruye las defensas de la democracia corrompiendo jueces, policías, militares y políticos.

La inseguridad podría derivar en violencia política que ya no confrontaría a militantes ideológicos, como en los 80, sino a sicarios. La debilidad de los estados no es sólo frente a la delincuencia; en los últimos quince años cayeron cuatro gobiernos por la incapacidad para controlar protestas callejeras. En Venezuela el gobierno de Carlos Andrés Pérez cayó, porque la fuerza pública no tenía ni técnica, ni conocimientos para enfrentar protestas y provocó más de 200 muertos; el gobierno Argentino cayó por las mismas razones después de 20 muertos, el de Bolivia después de 60 y, el más reciente, el de

Ecuador, cayó por el temor a hacer muertos. El autoritarismo tenía un cheque en blanco para controlar matando, las democracias no lo tienen y los encargados de la seguridad saben, poco o nada, acerca de cómo reprimir sin matar.

Estados Unidos, afectado por el terrorismo, tiene dificultades para ser un apoyo y al mismo tiempo es parte del problema. La demanda que tiene de trabajadores inmigrantes junto al endurecimiento de las políticas anti-inmigrantes; la tolerancia al consumo de drogas combinada con la intolerancia al comercio de éstas; la deportación de pandilleros a Centroamérica, para luego enviar al FBI a perseguirlos; la exportación de armas cortas hacia sociedades violentas e inseguras y finalmente la influencia de su modelo de seguridad predominantemente represivo. Todo esto agravado por el riesgo de polarización política entre EEUU y los gobiernos de izquierda de la región.

Los reflejos autoritarios de gobernantes y gobernados y las deficiencias de las instituciones encargadas de la seguridad estimulan el retorno de prácticas represivas. “Mano dura” o “populismo penal”, como lo llaman algunos, ofrece soluciones rápidas y fáciles a electores desesperados. El resultado, al igual que el populismo económico, es una hiperinflación de las tasas de delito, como ya ocurrió en El Salvador. El autoritarismo fue relativamente exitoso en sociedades rurales, con clases medias escasas, sin el desarrollo actual de las comunicaciones y sin las dependencias políticas, jurídicas y económicas creadas por la globalización. Muchos alemanes se enteraron de los campos de concentración hasta que terminó la guerra, ahora nos enteramos de matanzas, exterminios y torturas en minutos. En democracia es difícil ocultar víctimas y victimarios, todo se termina sabiendo.

Para mejorar la seguridad es necesario fortalecer académicamente a los encargados militares y civiles, crear nuevas especialidades y conocer más la experiencia europea (británica, francesa, alemana, etc.) que, en contraposición a la norteamericana, está basada en la tolerancia, la prevención, el control social, la participación ciudadana, la cultura de legalidad, la inteligencia estratégica analítica y la inteligencia policial comunitaria. La creencia de que la seguridad es fundamentalmente reprimir y que la inteligencia es espionar para reprimir, ha hecho pensar que éstas son tareas para los militares. Existen pocos directores de policía, ministros de defensa y jefes de inteligencia que sean profesionales civiles, los militares no se han formado en otras ramas del conocimiento y las universidades y sus académicos apenas comienzan a estudiar temas de seguridad, defensa e inteligencia.

La complejidad del problema demanda estudio y conocimiento incluso para la planificación represiva. Los progresos más notorios del continente en materia de inteligencia, policía y defensa vienen de profesionales civiles en México, Colombia y Chile, pero aún prevalece la tradición reactiva y represiva. Latinoamérica necesita una doctrina de seguridad democrática, como la han llamado los colombianos. Domina la idea de que los derechos humanos y la democracia son estrictamente un asunto ético, del cuál debería poder prescindirse en situaciones extremas, ya que estorban la eficacia. La seguridad es una tarea menos complicada en sociedades socialmente cohesionadas, donde los ciudadanos producen inteligencia, cooperan con la policía y contrarrestan de forma

temprana las conductas delictivas. Los abusos de poder y el irrespeto a los derechos humanos, por el contrario, dividen las comunidades, bloquean el ciclo de información e impiden la cooperación de los ciudadanos con las instituciones.

El autoritarismo era un modelo paternal punitivo que en algunos casos utilizaba fuerzas paramilitares. Cuando hacía esto último renunciaba al monopolio de la fuerza y volvía culturalmente violentos a los habitantes. La seguridad moderna requiere un modelo de responsabilidades compartidas que le deje al Estado el monopolio legítimo de la fuerza, y a los ciudadanos la construcción diaria de la paz social. Sin embargo, para aprender de cultura de legalidad es necesario aliviar la pobreza y reducir la desigualdad. Si los ricos quieren vivir seguros deben aprender a compartir, porque la convivencia de miseria con opulencia, más que una injusticia, es una provocación que no pueden resolver los policías.

Junio de 2006